

CRISIS DE DOMINACIÓN Y ENCRUCIJADA(S) DE LAS CLASES SUBALTERNAS

CONTRIBUCIONES AL DEBATE ESTRATÉGICO SOBRE EL PROBLEMA DEL PODER EN EL GOBIERNO DEL PACTO HISTÓRICO

Alejandro Guerrero Hurtado¹

1. Introducción

La victoria de Gustavo Petro, candidato de la coalición de oposición aglutinada en el Pacto Histórico, ha situado a la izquierda colombiana en una situación inédita: plantearse el problema del poder habiendo asumido la conducción parcial del aparato de Estado colombiano por la vía electoral. Por supuesto, no se trata de un problema nuevo en el contexto latinoamericano, el gobierno del Pacto Histórico hace parte de la segunda oleada de gobiernos progresistas en la región durante el siglo XXI y se suma al acumulado histórico de experiencias que asume una estrategia de reformas graduales en el marco de la institucionalidad vigente.

Es posible caracterizar el período actual por el acelerado proceso de radicalización política e intensificación de la lucha de clases; el aspecto determinante de dicho proceso es la crisis de dominación burguesa, agudizada por la crisis económica capitalista a escala planetaria y precipitada por el ascenso de la movilización de masas, que irrumpen en la vida política del país a través del Paro Nacional. Este trabajo distingue, entonces, tres momentos de la crisis de dominación actual: una primera fase de intensificación de las disputas entre facciones burguesas (2011-2018), envueltas en la discusión sobre el proceso de paz, tensión que resulta secundaria respecto a los efectos de la crisis mundial capitalista sobre la distribución relativa de beneficios económicos entre fracciones.

Dichas tensiones se profundizaron por la incapacidad del bloque dominante de descargar sobre las clases trabajadoras el peso de la crisis. A pesar del ascenso vertiginosos de la lucha social, factor determinante en la crisis de dominación, el proceso característico de la segunda fase ha sido la configuración del empate estratégico de fuerzas: el balance contradictorio del Paro Nacional y el estrecho margen de la elección presidencial (Guerrero, 2022), se han sumado a los resultados del plebiscito por la paz (2016) y a la recomposición de zonas regionales de retaguardia en el escenario de la lucha armada, procesos que constituyen pruebas de fuerza en el terreno amplio de la lucha de clases.

En todos estos ámbitos, el equilibrio relativo de fuerzas ha impedido que alguno de los bloques imponga a los demás las condiciones para resolver la crisis política. Una salida que puede asumir la vía restauradora autoritaria, la readecuación liberal-democrática de las modalidades de dominación

¹ Licenciado en Ciencias Sociales, Universidad Distrital Francisco José de Caldas; maestro en Estudios Políticos y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México; doctor en Estudios Latinoamericanos, UNAM. Líneas de investigación: acción colectiva y movimientos sociales con enfoque comparado; ciudad, hábitat y vivienda en áreas metropolitanas; analista de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (2019-2022).

burguesa, o la superación revolucionaria del estado de cosas actual. A pesar de que estos tres escenarios pueden combinarse en configuraciones políticas concretas, alguno de ellos va a predominar en la conformación de una situación estratégica de fuerzas emergente.

Este estudio concentra su atención en el tercer momento del período. El triunfo electoral de Gustavo Petro desencadenó una fase de disputa por la conquista del poder político, reincorporada momentáneamente a los canales institucionales de la vía reformista-electoral liderada por el Pacto Histórico.

No obstante la relevancia histórica que supone el ascenso de un movimiento político que no proviene del bloque dominante, aún es necesario caracterizar al nuevo gobierno. La primera dimensión de análisis que propone este documento tiene que ver con los alcances y posibilidades del programa de transición económica y política del Pacto Histórico, parcialmente determinados por el contenido de clase del sistema de alianzas que sostiene a dicho movimiento político. Desde la perspectiva de las luchas sociales y el campo popular, el debate que entraña la cuestión es si, en las actuales condiciones, el Estado colombiano puede vehicular los intereses estratégicos de las clases trabajadoras y, por tanto, convertirse en un punto de apoyo para desarrollar la lucha de clases en condiciones más favorables.

El segundo aspecto tiene que ver con la respuesta del bloque de poder a la crisis de dominación que experimenta, asumiendo que el repliegue táctico que supuso la transición pacífica del gobierno al Pacto Histórico no necesariamente significa que haya perdido el control del Estado y del sistema amplio de dominación de clase. Por supuesto, para abordar el debate es necesario precisar las categorías que permitan distinguir los momentos constitutivos de lo político, desde una propuesta teórica y metodológica que enfoque la cuestión del poder desde la perspectiva de las determinaciones históricas y materiales de la lucha de clases, tarea que se abordara en el siguiente apartado.

2. Fundamentos teóricos del estudio: poder, poder político y lucha de clases

A partir de la lectura de la experiencia concreta del proceso revolucionario, la tradición crítica del marxismo, particularmente aquella de orientación leninista, ha defendido la especificidad de lo político como referente estratégico de la lucha de las clases trabajadoras, diferenciándolo de las expresiones reivindicativas circunscritas al terreno económico (Marx, 2015) (Lenin, 2010). De acuerdo a esta concepción estratégica, el ascenso del movimiento revolucionario de masas avanza en un período de concentración de fuerzas que le permite desarticular el sistema de dominación burgués, cuyo fundamento social son las relaciones de dominación de una clase social sobre otras, condensadas en el Estado y operadas a través de su aparato burocrático-militar (Lenin, 1973).

En su lugar, es necesario desarrollar órganos de gestión social y económica con otro carácter de clase, portadores de relaciones sociales emancipadoras, que hacen uso de experiencias previas y embrionarias de poder popular fortalecidas por el impulso revolucionario, que conforman la base de

apoyo para la superación de la sociedad capitalista (Lenin, 1973b). La condición previa para este período de transición es, por tanto, el movimiento de ruptura que entraña la revolución y la toma del poder para encarar las tareas políticas de una nueva fase de la lucha de clases. La naturaleza política del período de transición presupone, por tanto, el ascenso de las masas trabajadoras como clase dominante, capaz de aglutinar a otros grupos sociales bajo la forma de un Estado revolucionario para quebrar la resistencia de las clases propietarias (Marini, 1976).

De esta forma, la configuración de una situación de dualidad de poderes, toma del poder político y despliegue del período de transición se articulan en la visión general que capitaliza la crisis revolucionaria y abre una salida superadora del orden capitalista (Zabaleta, 2011). Dicha concepción fue sintetizada por el propio Marx en su análisis de la Comuna de París (2011) y entraña, entonces, una crítica radical a las visiones gradualistas del proceso de cambio, que ven en el aparato de Estado un instrumento neutral capaz de vehicular de forma duradera los intereses de cualquier clase social que asuma su dirección:

Pero la clase obrera no puede limitarse simplemente a tomar posesión de la maquinaria del Estado tal como está, y a servirse de ella para sus propios fines (...) He aquí su verdadero secreto: la Comuna era, esencialmente, el gobierno de la clase obrera, fruto de lucha de clase productora contra la clase apropiadora, la forma política al fin descubierta que permitía realizar la emancipación económica del trabajo. (Marx, 2011, p- 82 – 88)

Sobre esta base teórica, expresión en el terreno de las ideas de experiencias concretas, es posible recapitular. El enfoque crítico del materialismo dialéctico señala que la condición previa para la existencia del poder político y el Estado es la conformación de sociedades organizadas en clases sociales. Por tanto, corresponde a un cierto nivel de desarrollo histórico de las fuerzas productivas y la división social del trabajo en el que aparece el problema de la gestión del excedente y su forma de apropiación (Marx y Engels, 2015). En ese sentido, el poder político es la capacidad de organizar el conjunto de la reproducción social en función de los intereses de la clase dominante; de esta forma, presupone la existencia de intereses antagónicos resultado de una cierta forma de organización material de la sociedad.

Por lo anterior, la dimensión constitutiva del poder político, respecto a otras formas de poder social, es su naturaleza de clase, concentrando y movilizándolo en el terreno de la lucha de clases sobre la base del monopolio de las capacidades coercitivas. El Estado es, precisamente, la forma general de condensación de las relaciones de dominación y poder político de una clase sobre las demás, subsumiendo bajo su lógica al conjunto de otras formas de subordinación y opresión social, que no se presentan de forma inmediata como relaciones de clase (Osorio, 2019).

Por supuesto, es necesario ubicar esta aproximación conceptual en el nivel teórico que le corresponde, donde aparece como abstracción de los determinantes fundamentales del poder político y el Estado, relaciones sociales propias de un período de la historia de la humanidad caracterizado por la existencia de clases sociales. No obstante, hace falta captar sus determinaciones históricas en el modo de producción capitalista y sus manifestaciones particulares en cada formación económico-social; de allí resultan cuestiones importantes en el análisis político, como la fisonomía de las clases sociales articuladas en bloque de poder, la relación entre los períodos del ciclo de acumulación y la modalidades de dominación, que dan formas particulares al Estado, o las relaciones desiguales entre Estados de la metrópoli capitalista y formaciones estatales dependientes, como la colombiana.

La concepción dominante del Estado, base de la filosofía política contractualista y de buena parte de la ciencia política contemporánea, contribuye a la mistificación de su forma aparente. A través suyo el Estado se presenta como cuerpo burocrático-administrativo ajeno a las determinaciones de clase y por tanto, al estar separado de la sociedad, funciona como eje cohesionador de lo propio social, cómo síntesis integradora del conflicto dentro de los límites del contrato social, del que emana el poder político.

En ese sentido, la primera particularidad del Estado capitalista corresponde a la fetichización de las relaciones de producción capitalistas, cuya apariencia inmediata es la relación entre cosas, velando el contenido de clase real de las relaciones de producción, que afianzan la propiedad privada de los medios de producción y, simultáneamente, concentran los medios políticos de organización de la vida en sociedad. De esta forma, la visión crítica del Estado capitalista se enmarca, necesariamente, en la comprensión del capital como unidad diferenciada y contradictoria de relaciones de explotación y dominio (Osorio, 2022, p 35).

Así enfocado, es posible apreciar la contradicción entre el contenido de clase del Estado capitalista y la forma aparente del aparato de Estado², que se presenta a la percepción inmediata como maquinaria administrativa y coercitiva, entramado institucional y terreno neutral en la lucha por el poder político (Osorio, 2022). Valga decir que su carácter aparente no le resta eficacia política, al contrario, a través suyo las formas concentradas de coerción del Estado capitalista reclaman legitimidad como “fuerza pública” y, simultáneamente, hace posible mantener la lucha de clases dentro de los límites del orden burgués.

Al respecto, resulta pertinente la crítica reciente de Osorio (2022) a la tesis de Nicos Poulantzas sobre la vía democrática al socialismo, presentada en su libro *Estado, poder y socialismo* (1979). La reflexión de Osorio esclarece las diferencias sustanciales entre una concepción del Estado como condensación de relaciones de dominación de clase, por un lado, y una noción de lo estatal como esfera

² Aquí lo aparente es considerado en sentido dialéctico, es decir, no como ilusión irreal sino como forma necesaria de la propia esencia para desplegarse eficazmente (Lukacs, 1985).

nodal de las relaciones de fuerza entre diversas clases sociales, distancia teórica con implicaciones políticas sustanciales.

La cuestión central de la polémica, que actualiza el debate histórico entre reforma y revolución, es si el Estado capitalista –esto es, asumiendo las determinaciones histórico-concretas de su contenido de clase, para no referirlo como abstracción teórica- puede expresar los intereses estratégicos de las clases trabajadoras, más allá de concesiones parciales y adecuaciones democráticas a las modalidades de dominación.

La experiencia histórica de las luchas subalternas y, dentro de ella, la tradición de pensamiento crítico, han demostrado que dicha forma de convivencia política no es posible, al menos no de forma duradera y en el marco de un proceso gradual de transición de una forma capitalista a otra de carácter socialista. La concepción del Estado capitalista como campo de batalla desde donde impulsar el proceso revolucionario, idea que corresponde a la tradición reformista de Kautsky³, diluye la comprensión del proceso histórico que ha convertido al Estado capitalista en una expresión institucionalizada de la concentración de fuerzas de las clases dominantes, que le dispensa una ventaja decisiva en el terreno de la lucha de clases.

Por tanto, el Estado capitalista constituye la forma general de la dominación política burguesa, le confiere unidad a sus fracciones y existencia efectiva como clases dirigentes (Gramsci, 1975); a través suyo, las clases dominantes contienen el desarrollo de la lucha de clases y circunscriben las concesiones a los trabajadores dentro de los límites de sus intereses estratégicos. En este nivel de abstracción, la función del Estado es crear las condiciones necesarias para la reproducción del sistema y de sus polos constitutivos: capital y trabajo, subordinando al conjunto de las clases subalternas a la dirección de las clases dominantes; proceso que le demanda, además, dirimir los antagonismos secundarios entre fracciones de capital.

Por supuesto, dicha forma de articulación política entre fracciones de la clase dominante tiene un carácter desigual, algunas están en capacidad de dirigir el bloque de poder e imprimirle las modalidades de dominación que se adecuen a la lógica del proceso de acumulación que comandan; por su parte, es posible identificar fracciones que, aún insertas en relaciones de producción como propietarias o explotadoras pero subordinadas al proceso de concentración de capital, son crecientemente relegadas del poder político o de la conducción del aparato de Estado (Poulantzas, 2012).

³ Daniel Bensaïd (2013, p.60) ha planteado el problema en los siguientes términos: “Para Kautsky la cuestión no reside realmente en la destrucción del poder del Estado, sino más bien en afirmar “la preeminencia” del legislativo sobre el ejecutivo y el judicial, y en la democratización del sistema electoral con la eliminación de las cámaras altas, “pero nunca, absolutamente nunca, ese proceso puede desembocar en la destrucción del poder del Estado, sino siempre en un desplazamiento de las relaciones de fuerza en el seno del poder del Estado” (Kautsky (1912). *La nouvelle tactique*. En: *La Voie occidentale*. Citado por Bensaïd)”.

En esta dimensión, que toca lo relacionado a la composición del bloque de poder y las modalidades concentradas de dominación burguesa, el factor explicativo de última instancia es la forma de acumulación de capital que predomina en una formación económico-social en un período histórico determinado, además de su forma de inserción al sistema-mundo capitalista. El poder político se adecua al nivel de desarrollo de la lucha de clases y adopta formas transitorias de dominación de acuerdo a las necesidades objetivas del proceso de acumulación. En ciertos períodos del ciclo, puede requerir mayores tasas de explotación, acelerar la transferencia de valor entre economías y ramas de la producción o, caso contrario, puede hacer concesiones económicas a las clases trabajadoras para apoyar la reproducción ampliada de capital en un mercado interno de mayores dimensiones.

Ciertamente, el Estado cohesiona políticamente a una clase social cuyo fundamento material es crecientemente contradictorio, alentando conflictos interburgueses por la distribución relativa del excedente y a la consolidación de ejes estratégicos de acumulación, alrededor de los cuales se organizan formas de producción con distintos niveles de desarrollo que compiten por apropiarse plusvalía.

Sobre esta línea de análisis, que sintetiza el nivel de mayor concreción, es posible analizar períodos de antagonismo entre el Estado, que encarna al sistema dominante de alianzas o bloque de poder, y el aparato de Estado, cuya gestión y administración frecuentemente queda en manos de elementos cuya extracción de clase difiere de las capas dominantes. En este punto, el aspecto decisivo del análisis es precisar hasta qué punto el grupo que asume la gestión del aparato de Estado constituye una clase de apoyo activa⁴, dispuesta a participar de la alianza de clases que da forma al sistema de dominación, sin que necesariamente haga parte del bloque dominante, es decir, de las fracciones que conducen el proceso general de acumulación de capital (Marini, 1976).

En períodos caracterizados por una crisis de dominación burguesa, las disputas entre fracciones frecuentemente adoptan la forma de antagonismos entre el Estado y el aparato de Estado. Para poder identificar si dichas tensiones indican cambios más o menos decisivos en las relaciones de fuerza, suficientes para transformar o destruir las formas vigentes de dominación, es necesario precisar la naturaleza de la crisis, si se desencadena en un período del proceso de acumulación que intensifica conflictos redistributivos entre fracciones burguesas o, caso distinto, si dan cuenta del creciente proceso de autonomización de las capas que asumen la gestión del aparato de Estado.

Ahora bien, resulta cierto que la sincronización relativa de crisis de acumulación y agotamiento del sistema de dominación vigente, que alienta conflictos entre fracciones, puede desencadenar una crisis orgánica que abra perspectivas políticas para las clases trabajadoras. No obstante, las crisis no necesariamente se resuelven con formas políticas superadoras del antiguo orden, por tanto, un momento

⁴ Esta categoría es incorporada por Ruy Mauro Marini (1976) para explicar la forma de inserción de la pequeña burguesía en el sistema de dominación en Chile, a través de lo cual, explica las dificultades de la Unidad Popular para movilizar a dicha capa social dentro de la estrategia de la "vía chilena al socialismo".

de inflexión revolucionaria de la crisis orgánica tiene como condición fundamental el ascenso del movimiento de masas subalternas, su irrupción al primer plano de la vida política.

El acelerado proceso de intensificación de la lucha de clases en esas condiciones, puede profundizar las disputas interburguesas y sus expresiones institucionales, abriendo un margen de maniobra para la conformación de sistemas de alianzas emergentes que, incluyendo porciones de las clases trabajadoras, copen el aparato de Estado y desafíen el poder político de las clases dominantes. De allí la necesidad de insistir en la distinción entre, por un lado, la concepción estratégica que encamina la ruptura revolucionaria para materializar la toma del poder político en una forma revolucionaria del Estado y, por otro lado, aquella que trata de afianzar gradualmente posiciones de control dentro del aparato de Estado capitalista.

Esta última vía, según lo expuesto hasta ahora, no necesariamente significa asaltar el poder político del propio Estado capitalista que, además, se apoya en sistemas de dominación que hunden sus raíces en la propia sociedad. Las características de dichos sistemas ha enfrentado a los teóricos de los aparatos ideológicos del Estado y el Estado Integral (Althusser, 1970) (Pereyra, 1988), con aquellos que defienden la necesidad de diferenciar al Estado, centro del poder político, del conjunto de otras formas de poder social sobre los cuales una clase, o alianza de clases, asienta su poder y generaliza su visión del mundo (Marini, 1976). Para esta última corriente teórica, la unidad diferenciada de los tres momentos: Estado, aparato de Estado y sociedad civil, son los elementos constitutivos del sistema de dominante de clase, que incluye instituciones como la escuela, la familia o los medios de comunicación.

La perspectiva teórica de este estudio se propone contribuir al debate desde la perspectiva de los sistemas de dominación, subrayando: la articulación jerárquica entre el eje estatal de condensación de poder político y otras formas de poder u opresión social, siendo que estos últimos, si bien apuntalan al bloque de poder, pueden ser copados sin poner en riesgo la reproducción general de las condiciones de dominación y explotación; en segundo lugar, crear un espacio de análisis de los grados relativos de autonomía entre Estado, aparato de Estado y sistemas de dominación de clase, que solo bajo formas de gobierno autoritarias tienden a coincidir (Osorio, 2022).

Como se observa, la perspectiva teórica del estudio trata de recuperar el enfoque crítico del poder político y el Estado como relaciones sociales, que aporte una noción estratégica de la lucha de clases a la que corresponden tiempos históricos propios: períodos de dilatación y aparente tranquilidad social, seguidos de coyunturas de acelerada intensificación de la lucha social.

3. Conformación y crisis del sistema de dominación de clases en Colombia

Por supuesto, existe una amplia variedad de enfoques teóricos para tratar de caracterizar al Estado colombiano y las particularidades del poder político en el país. Algunos de estas perspectivas han captado uno de sus aspectos más sobresalientes: la aparente coexistencia de un proceso político con

reglas de juego formalmente democráticas, por un lado, con prácticas fuertemente autoritarias, por otro, configurando una democracia de excepción (Estrada, 2022).

Por otra parte, se han hecho importantes avances en la comprensión del bloque de poder en Colombia, identificando las clases sociales que lo integran y su particular configuración, destacando el peso de sus aparatos represivos y su carácter contrainsurgente (Franco, 2009) (Tauss et. al, 2009). Este estudio comparte varias de las categorías y enfoques metodológicos de dichos análisis. No obstante, es necesario señalar que la guerra contrainsurgente constituye una estrategia concreta del bloque de poder para encarar la lucha de clases; en tanto modalidad de dominación, su tránsito y consolidación corresponde a las necesidades del proceso de acumulación de capital y al nivel de desarrollo de la lucha de clases.

Por tanto, es necesario explicar los cambios en los ritmos y modalidades de la guerra contrainsurgente considerando aspectos como: grado de consolidación del bloque de poder y su capacidad para producirse consensos políticos; cambios en la influencia política relativa de cada fracción dentro de dicho bloque, que puedan derivar en la crisis y transición a otro sistema de dominación; fortalecimiento de las capacidades de contención y modalidades de resistencia de las clases subalternas, entre otros.

En síntesis, a pesar de su intensidad en el caso colombiano, la contrainsurgencia es un medio de dominación cuyo uso se ha consolidado en otros países de América Latina; por tanto, si bien es una condición explicativa necesaria para dar cuenta del bloque de poder en Colombia, es necesario dar cuenta de los factores que, en última instancia, explican la implementación de dicha estrategia dentro de la formación social colombiana. El propósito de este apartado es, precisamente, analizar los aspectos generales del período de formación, consolidación y crisis del sistema de dominación aún vigente en Colombia, al que provisionalmente se hará referencia como Uribato.

3.1 Crisis del sistema de dominación bipartidista: la emergencia del Uribato

La grave crisis económica de 1999, que vista de conjunto significó la ruina definitiva de la forma de acumulación de capital basada en la industrialización (Santa María, 2020); el fracaso del proceso de paz como estrategia de contención de la lucha de clases; y, en tercer lugar, el comienzo de una nueva arremetida del capital imperialista a escala mundial, fueron factores que precipitaron la crisis del bipartidismo como marco de referencia para los arreglos políticos entre fracciones dominantes en Colombia.

Entre 1999 y 2002 se desarrolló una fase de transición, pactada entre clases dominantes tradicionales y emergentes, hacia una modalidad de dominación que profundizó los rasgos contrainsurgentes y autoritarios del Estado colombiano, adoptando una estrategia frontal de

aniquilamiento en contra del campo popular. La construcción hegemónica ascendente⁵ articulada por el Uribato, modificó la influencia relativa de ciertos sectores dentro del bloque de poder, ajustando la fisionomía del Estado a los cambios en las condiciones del desarrollo capitalista que experimentaba el país desde finales de los 70's. A continuación se analiza la formación y consolidación del bloque emergente.

La debacle del proceso de industrializador en el país coincidió con cambios sustanciales en las condiciones de inserción dependiente del país al mercado mundial. En la década de los 80 se consolidó el desplazamiento del eje de gravedad del sector externo, fuente generadora de divisas, hacia la explotación de petróleo y el tráfico de estupefacientes. Dicho cambio no es menor, si se tiene en cuenta que la burguesía agroexportadora tradicional había impulsado el proceso de industrialización desde los años 30 controlando el flujo de divisas provenientes del café (Arrubla, 1964), una mercancía cuya circulación al mercado mundial controlaba en calidad de intermediaria, a través de la Federación Nacional de Cafeteros.

Por sus características, la economía exportadora emergente amplió la influencia del capital imperialista en el país, que a la fecha concentra buena parte de sus inversiones directas en el sector primario-exportador de orientación minero-energética (Vargas, 2022). Dicho cambios, además, fueron impulsados por el ascenso de una clase social dedicada a la actividad criminal del narcotráfico que, más allá de todo juicio de valor sobre su naturaleza legal, comenzó a desarrollar la producción sobre la base de la gran propiedad territorial, operando flujos comerciales de exportación que le permitieron acumular excedentes de liquidez, capaces de irrigar otros sectores de la economía.

Se trata, entonces, de una clase emergente con intereses materiales en distintas esferas, que combinó las formas tradicionales de defensa de la propiedad territorial con una lógica capitalista de inversión que, a pesar de ser subrepticia, sigue cumpliendo las funciones convencionales del capital dinerario y el sistema de crédito en la acumulación de capital (Rocha, 2001). Desde esta perspectiva, es posible afirmar que la guerra entre el Estado colombiano y un sector del narcotráfico, entre 1985 y 1994, constituye una etapa preliminar de transición, que enfrentó a la burguesía tradicional, en pleno ocaso, con una clase dominante incipiente que sentó paulatinamente las bases de su liderazgo político durante los 90.

Este cuadro de transformaciones cualitativas del sector externo y debacle de la industrialización dependiente, se desarrolló en medio de una fase expansiva de internacionalización del gran capital. La crisis de 1999 aceleró la centralización de capital, apuntalando la forma monopólica que adoptó el capital

⁵ La categoría "construcción hegemónica ascendente" ha sido usada por García Linera (2008, 26) para analizar la crisis del Estado boliviano en el contexto del levantamiento popular y la lucha por el poder en ese país en el año 2000. Se incorpora en este análisis porque permite caracterizar el conjunto de formas políticas que puede adoptar la conflictividad en coyunturas de intensa confrontación entre clases sociales.

industrial y bancario desde los años 70 (Silva-Colmenares, 1977). A expensas de la crisis, conglomerados como el Grupo Empresarial Antioqueño, Grupo Bolívar, Santodomingo y Grupo Aval entraron en una fase de consolidación que les permitió transnacionalizar sus operaciones en otros países de América Latina durante la primera década del siglo XXI⁶.

Ciertamente, por las determinaciones propias de una formación social dependiente, en la expansión de estos grupos financieros no predominó un proceso auto-centrado de concentración de capital. Este proceso entraña, en cambio, dos aspectos: el entrelazamiento creciente con el gran capital imperialista, que se desarrolla bajo la forma del capital accionario, a través de la venta de participaciones a fondos de inversión y conglomerados de mayor tamaño, y del endeudamiento con instituciones como la Corporación Financiera Internacional, del Banco Mundial (IFC, 2007) (IFC, 2020); y, por otra parte, la privatización masiva de activos públicos estratégicos (Tobón, 2018, p. 520), entre ellos Bancolombia (1994), Bancafé (2006) y los fondos públicos de pensiones, que pusieron a disposición de estos conglomerados una de las principales reservas de ahorro interno, con flujo de liquidez permanente, calculada en \$317 billones de pesos colombianos (Kalmanovitz, 2021).

Por tanto, el grado incidencia de dichos grupos financieros en el sistema emergente de dominación del Uriato no refiere exclusivamente a la escala de sus operaciones, sino a su función como vehículos de penetración del gran capital imperialista. Al mismo tiempo, su proceso de expansión hacia otros países de América Latina correspondió a las restricciones de la demanda interna de bienes intermedios y de consumo, consecuencia del rápido deterioro de los ingresos de las clases trabajadoras bajo el Uriato. Por sus propias contradicciones, el acelerado proceso de acumulación en dichas unidades de producción se enfrentó a condiciones de circulación mercantil restrictivas, proceso que ha consolidado su subordinación como vehículos de la estrategia de expansión del gran capital en la región (IFC, 2019) (Cajamarca, 2021).

De esta forma, es posible identificar la composición social de la alianza entre fracciones dominantes y reconstruir la configuración emergente del bloque de poder con el Uriato que, como se esbozó antes, no excluyó a las burguesías tradicionales pero sí modificó su influencia política relativa, subordinándolas al liderazgo político del sector más retardatario. En este sentido, el Uriato abrió una salida autoritaria a la crisis de dominación de clase que agotó al bipartidismo, acompañada con la debacle de la forma previa de acumulación a finales de los 90. Por sus características, la construcción hegemónica ascendente gana cohesión programática a través de la política de Seguridad Democrática, desplegada en tres ejes:

El primero, fue acelerar la concentración de la tenencia de la tierra a través del despojo y el acaparamiento, afianzando el esquema tradicional de desarrollo del capitalismo agrícola y agroindustrial

⁶ Para una descripción detallada de este proceso en el caso del grupo financiero Suramericana –Grupo Empresarial Antioqueño, ver (Silva-Colmenares y Padilla, 2013).

sobre la base de la gran propiedad. En este contexto, la coyuntura de precios altos del petróleo y la expansión de los agrocombustibles (2004-2012) aceleraron la especialización productiva de la economía en exportación en bienes primarios.

El segundo eje consistió en relanzar el proceso de acumulación del capital industrial y bancario en condiciones monopólicas, sobre la base de la intensificación de las condiciones de explotación de la fuerza de trabajo. Las características de este proceso profundizaron la heterogeneidad estructural de la base productiva del país, propias de su condición dependiente, diferenciando el polo monopólico de alta productividad y baja demanda de fuerza de trabajo, por un lado, de las unidades productivas relativamente dispersas y de menor escala de producción, por otro, que absorben hasta el 80% de la mano de obra que subsiste en condiciones de formalidad salarial (MinTrabajo, 2019)⁷.

Al respecto, vale señalar que a través de la contrarreforma laboral –ley 789 de 2002- y la arremetida armada en contra de los sindicatos, el Uriato logró comprometer a las medianas y pequeñas burguesías como clases de apoyo activo del sistema de dominación emergente. Con la eliminación de los recargos nocturnos y el pago de las horas extras, el Uriato le reconoció a estos sectores la posibilidad de apropiarse una mayor cantidad de plusvalía absoluta, adoptando modalidades extensivas de explotación de la fuerza de trabajo con jornadas laborales más largas. De esa forma, las clases dominantes combinaron las acciones coercitivas directas en contra de los sindicatos con transformaciones en el proceso inmediato de producción, incluyendo las modalidades “flexibles” de contratación, que profundizaron la dispersión de las clases trabajadoras.

A pesar de las concesiones a la mediana y pequeña burguesía, en Colombia predominan condiciones dependientes y monopólicas de acumulación, determinantes de la distribución de plusvalía entre fracciones y sectores de clase⁸. De allí que el alto grado de concentración del sistema de crédito (Jaulín y Lizarazo, 2017), vaso comunicante de los grupos financieros con el gran capital imperialista, haya hecho posible que los ritmos de crecimiento del capital bancario sean mayores que las del conjunto de la economía en las últimas décadas.

No obstante, el ritmo de centralización de capital por la vía del sistema de crédito en Colombia debe ser ubicado en un contexto más amplio. Es el nivel de articulación de la oferta de crédito con otras formas de capital dentro de la orientación estratégica de los grupos financieros, el que les permite a estos

⁷ Cabe aquí una consideración adicional, según CEPALSTAT la mayor cantidad de fuerza laboral ocupada en Colombia se concentra en sectores de baja productividad: en 2008, representaba el 58% de los ocupados, en 2011 el 60% y en 2018 el 52%; proporciones relativamente más altas que el promedio simple de América Latina. Ver: https://statistics.cepal.org/portal/cepalstat/dashboard.html?indicador=id=252&area_id=633&lang=es

⁸ Para Jaime Osorio (2019) las fracciones corresponden a diferenciaciones en el seno de una clase social producto de la división social del trabajo. En el caso de la burguesía, corresponden a las formas funcionales que adopta el capital en el proceso general de producción y circulación: burguesías bancarias, industriales, comerciales, etc. Los sectores, por su parte, son subconjuntos estratificados de las fracciones de clase, según la magnitud de los medios de producción y plusvalía apropiada: la gran, mediana y pequeña burguesía.

conglomerados captar plusganancias extraordinarias⁹. De esa forma se articula el proceso jerárquico de producción y transferencia de valor hacia los centros de acumulación que comandan el proceso general de reproducción de capital en el país, que afianza y profundiza la condición dependiente del país.

En consecuencia, el tercer eje programático que cohesionó al Uriato fue profundización del grado de integración al gran capital monopólico de origen imperialista, base material de la política de confianza inversionista. Al respecto, cabe insistir que la transformación estructural del sector externo en la década de los 80 modificó la relación económica entre la burguesía imperialista y las burguesías locales colombianas. El esquema de inserción por transferencias de capital fijo, propio de la industrialización dependiente (Arrubla, 1964), se subsumió paulatinamente al mecanismo económico exportador basado en la explotación minero-energética, con mayor participación directa del gran capital monopólico.

Este proceso tiene varias implicaciones, señaladas en su momento por la Teoría Marxista de la Dependencia (Marini, 1974) (Bambirra, 1999). El predominio de un sector externo en manos del capital extranjero modifica las condiciones de transferencia de valor desde los países dependiente hacia los centros de acumulación mundial. Por su naturaleza, la economía de exportación concentra sus actividades en una mercancía que, como el petróleo, se realiza predominantemente en el mercado externo y cuya producción tiene un carácter social menos amplio que la de valores de uso como el café.

De esa forma, el tamaño relativo del mercado interno pierde importancia en el proceso general de reproducción ampliada de capital, por lo que las fracciones dominantes pueden prescindir del consumo de los trabajadores y acelerar su precarización. Se profundiza, entonces, la ruptura entre la esfera de circulación de bienes de consumo, que declina, y el segmento de bienes suntuarios orientado a las clases con capacidad de controlar el flujo de divisas proveniente de la explotación petrolera. El aparato de Estado se convierte, por su parte, en objeto de disputa por el control de la distribución de plusvalía que adopta la forma de renta petrolera, flujo crecientemente regulado según las necesidades de acumulación del gran capital imperialista. Este proceso afianza la sujeción de la dinámica interna a los períodos de expansión y crisis de las economías centrales (Marini, 1974).

Ahora bien, el incremento del flujo de divisas por la coyuntura de precios altos del petróleo (2004-2012) tuvo un efecto de revaluación sobre la moneda local que, por las condiciones de inserción dependiente ya analizadas, incentivó la apertura del mercado interno a las manufacturas importadas¹⁰ y aceleró la reducción relativa de la base industrial de menor concentración orgánica, coto de acumulación

⁹ Para Marx (1982, p. 180), la plusganancia extraordinaria es el resultado de la transferencia de valor de los capitales de menor productividad a los capitales de mayor composición orgánica. Su magnitud equivale a la diferencia entre la tasa media de ganancia, de cuya nivelación participan todos los capitales individuales, y el costo de producción que asumen los capitales más productivos, proporcionalmente menor a la media social, lo que les permite apropiar más plusvalía de la que “producen”.

¹⁰ Es el fenómeno es caracterizado por la ciencia económica dominante como la enfermedad holandesa, que lo interpreta como una distorsión en el proceso de industrialización (Clavijo, 2013) y no como el resultado del desarrollo histórico de relaciones propias del capitalismo dependiente.

de las pequeñas y medianas burguesías. De esa forma, el proceso de integración subordinada al gran capital monopólico se consolidó en la esfera de la circulación mercantil y se instituyó a través del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, en 2008.

En síntesis, el período de transición y consolidación de la construcción hegemónica ascendente, entre 1999 y 2008, elevó la capacidad de movilización político-militar del bloque de poder y sus clases de apoyo. La actividad antisubversiva que logró romper la espina dorsal del dispositivo insurgente a nivel nacional, la contrarreforma agraria que aceleró la concentración de la propiedad de la tierra y la consolidación de la posición de vasallaje geopolítico del Estado colombiano a Estados Unidos, fueron tres dimensiones de un mismo proceso. De esta forma, la arremetida armada en contra del conjunto del campo popular, desplegada a través de fuerzas regulares y paramilitares, consolidó un cuadro de fuerzas relativamente estable pero poco duradero, bajo la cohesión política y programática del Uribato.

No obstante, a pesar de su solidez en el terreno militar, las condiciones del desarrollo capitalista dependiente agudizaron las contradicciones dentro del bloque de poder y el sistema de dominación. La diferenciación objetiva del proceso de acumulación sentó las bases de tensiones antagónicas entre, por un lado, el polo monopólico estrechamente vinculado al gran capital, con mayores capacidades de disponer excedentes de liquidez y producción fuera del país, y la mediana-pequeña burguesía, por otro lado, que enfrentaba la intensificación de las restricciones del mercado interno y el incremento de la competencia externa a la circulación de su propio capital.

Por lo anterior, se resquebrajó el marco de distribución de plusvalía, fundamento material de cualquier sistema de alianzas entre fracciones burguesas. Es precisamente a partir de 2008 que el período de consolidación del sistema de dominación entra en una fase de desgaste; un sector de la mediana y pequeña burguesía se desprendió paulatinamente del proyecto político-militar del Uribato, buscando formas de expresión más autónomas de su agenda política a través de vehículos como el Partido Verde, facciones del Partido Liberal y elementos del Polo Democrático nucleados en el Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario (MOIR).

Para ganar terreno político en el escenario de la lucha de clases, dichos sectores han combinado la lucha electoral con acciones de movilización social, orientadas por un proyecto incipiente que ha articulado proteccionismo económico y liberalismo político. Dicha plataforma ha incluido una agenda de derechos sociales de nueva generación, frontalmente opuesta al conservadurismo social del Uribato en cuestiones como los derechos sexuales y reproductivos.

De esa forma, a través de fenómenos políticos como la Ola Verde (2010) y de ejercicios organizativos como Dignidad Agropecuaria (2011), además de la consolidación de una corriente minoritaria al interior del movimiento estudiantil (2011 y 2018), las fracciones progresistas de la pequeña burguesía han impulsado un programa político de defensa de la soberanía nacional, anticorrupción, precios de sustentación a productos agrícolas y mayores aranceles a productos

importados; por tanto, son sectores de clase que han ganado consciencia de la diferenciación objetiva de sus intereses y una visión del Estado que pueda articularlos, siempre dentro del marco común que los une a la gran burguesía en tanto propietarios y explotadores.

No obstante la importancia de la radicalización activa de la pequeña burguesía en el cuadro general de fuerzas, solo hasta el 2011 el Uriato entró un momento de intensificación de la disputa interburguesa en el país. Este período de decadencia política del sistema de dominación tuvo dos aspectos decisivos:

El primero, fueron los antagonismos entre fracciones del bloque de poder que crearon tensiones entre el Estado, que mantiene el poder político bajo el liderazgo de las facciones más retardatarias, y el aparato de Estado, cuya administración fue asumida por parte de las burguesías dominantes tradicionales que habían pactado su subordinación al Uriato a comienzos de siglo.

La forma inmediatamente apreciable de este antagonismo fue el distanciamiento político de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, cuyo eje de disputa fue el proceso de paz con las FARC-EP. Durante ese período fue común que una y otra fracción movilizara a distintos aparatos de Estado y elementos del sistema amplio de dominación: la lealtad de un sector de las fuerzas militares al Uriato, que involucró al ejército en actividades de espionaje en contra del equipo negociador de paz; maniobra parcialmente neutralizada por Santos en el terreno de la propaganda, a través de la gran prensa de tradición liberal, como la Revista Semana –antes de su alineación definitiva con las fracciones más retardatarias, en 2011-; y los arreglos clientelistas con el Congreso, para acelerar el trámite del marco jurídico para la paz, entre otros.

Por ahora, no hay evidencia que demuestre que la línea de quiebre entre Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos haya correspondido a los antagonismos entre fracciones monopólicas conectadas al mercado mundial, por un lado, y fracciones industriales orientadas al mercado interno, por el otro. En cambio, resulta más consistente la tesis sobre las diferencias entre ambos sectores alrededor de la modalidad de dominación de clase que debía materializarse en la conducción de la guerra, esto es, la estrategia del bloque de poder para encarar el movimiento ascendente de las luchas sociales.

Como ya se señaló, la alianza de clases articulada por el Uriato optó en 2001, respaldada por el Plan Colombia, por una estrategia frontal de aniquilamiento del campo popular, reciclando el recurso a la violencia como palanca dinamizadora de las relaciones capitalistas en el campo, aspecto característico de la formación social colombiana.

Por su parte, las fracciones disidentes nucleadas en el gobierno de Santos optaron, ya en 2011, por una estrategia de desarme ideológico y neutralización política de las clases subalternas, que facilitara la penetración de capital en áreas geográficas tradicionalmente vedadas a la inversión por la presencia guerrillera. La subsunción de la guerra contrainsurgente frontal a la forma democrática aparente –que

no anula la primera pero sí le imprime su lógica-, es la base de una modalidad de dominación que trata afianzar en el terreno civil lo ganado en el campo de batalla, la cual requería un compromiso político que ofreciera concesiones limitadas para la reforma del Estado, el Acuerdo de Paz.

Las adecuaciones en la modalidad de dominación implicaron, entonces, la transición de un período de concentración de fuerzas del aparato militar y paramilitar, con despliegue nacional y unidad de mando, que corresponde a la fase de consolidación del Uriato; a un esquema más disperso, propio de la guerra de baja intensidad, creado para conformar una reserva estratégica de estructuras armadas irregulares con control territorial efectivo en las regiones, atributo característico de las nuevas expresiones del paramilitarismo en Colombia (Giraldo et. al., 2022)

El segundo aspecto que envuelve la decadencia del Uriato, menos explorado en el análisis político pero de mayor importancia, es el cierre de la coyuntura de precios altos del petróleo, entre 2014 y 2015, que intensifica la disputa política por la distribución de divisas en un período de escasez relativa. Por supuesto, el inicio de esta fase de precios bajos constituyó un giro de tuerca de la crisis económica mundial, desencadenada en 2008, sobre la estabilidad del sistema de dominación en Colombia.

El acelerado proceso de transferencia de valor a las economías centrales¹¹, propio de los períodos de crisis, aumentó la presión sobre las clases dominantes para implementar mecanismos que compensaran la pérdida de plusvalía, asegurando condiciones más intensas de explotación de la fuerza de trabajo. Es precisamente allí, en la incapacidad política del bloque dominante para imponer a las clases trabajadoras las reformas necesarias para contener la caída de la tasa de ganancia, donde hay que ubicar el momento inflexión que precipita la crisis del sistema de dominación burguesa en Colombia.

La respuestas de las clases subalternas al intento del gobierno Duque de implementar una reforma tributaria, pensional y laboral desencadenó el ciclo de movilización que dio forma a la coyuntura del Paro Nacional (2019 – 2021). La respuesta social en las grandes ciudades fue masiva por esos días, el volumen de la movilización no fue calculado por las dirigencias sindicales y demás sectores articulados en el Comité Nacional de Paro (CNP, en adelante), que rápidamente fueron desbordados por el salto político de las consignas económicas, multiplicadas en amplitud y alcance por la crisis de legitimidad que ya experimentaba el gobierno de Duque.

De esta forma, se conjugan los factores determinantes de la crisis de dominación que caracteriza el período actual: la intensificación de la disputa interburguesa, enmarcada en la crisis económica mundial, que ha profundizado a la radicalización política de una fracción de las pequeñas burguesías y

¹¹ Un indicador aproximado de este proceso es la transferencia neta de recursos, disponible en CEPALSTAT, que, en el caso de Colombia, muestra dos rasgos característicos en relación a América Latina. **a.** Un comportamiento inverso respecto a la región. A partir de 1998 inicia en Colombia un ciclo amplio de crecimiento en el ritmo de transferencia de recursos, esto es, el volumen de envío de utilidades a casa matrices por IED, en contravía del ciclo amplio de decrecimiento de dicho rubro en América Latina, que inicia en 1992. **b.** La transferencia de recursos se acelera en Colombia a partir de 2012, cae en 2017 hasta niveles de 2013 y rebota para recuperar su tendencia histórica al alza. Estos datos son consistentes con la tesis planteada. Ver https://statistics.cepal.org/portal/cepalstat/dashboard.html?indicator_id=856&area_id=361&lang=es

ha facilitado el ascenso de la movilización de masas, asistida por el proceso de acumulación de fuerzas que ha experimentado el campo popular desde el año 2008.

4. El sentido de la transición política: carácter y fisonomía de clase del Pacto Histórico

De entrada, es necesario señalar que este artículo no pone en duda que la victoria electoral del Pacto Histórico en las elecciones legislativas y presidenciales de 2022 constituye una transformación sustancial de la relación de fuerzas, abriendo nuevas perspectivas políticas para el campo popular en Colombia. No obstante, cabe problematizar el discurso del gobierno entrante, que ha caracterizado el momento político como un período de transición democrática liderado por el primer gobierno popular de la historia de Colombia.

Desde el punto de vista estratégico, que refiere a la toma del poder político para minar la resistencia de las clases dominantes y desencadenar un proceso de transición hacia formas no capitalistas de organización social, el debate teórico que trata de abordar este apartado es si el Estado colombiano actualmente existente –unidad contradictoria de la forma aparente y contenido efectivo de relaciones de clase- puede vehicular de forma duradera los intereses de las clases trabajadoras y otros grupos dominados, potencialmente aliados.

Por otra parte, enfocada la cuestión táctica, el problema consiste en precisar hasta qué punto la conquista por vía electoral de la administración del aparato de Estado ayuda a desarrollar, en condiciones más favorables para los trabajadores, la lucha de clases, dinamizando el proceso de acumulación política sin el acoso permanente de la maquinaria coercitiva del Estado.

Para esto, resulta útil insistir que la crisis de dominación burguesa ha entrado en una fase de disputa por el poder político con la construcción hegemónica ascendente del Pacto Histórico, que puede llegar a romper la situación de empate estratégico que prevalece desde el 2019. Al mismo tiempo, es necesario caracterizar la composición social del sistema de alianzas de clase que se articula en el gobierno de Gustavo Petro, para determinar si el elemento popular dirige el bloque o se integra en condiciones de subordinación.

4.1 Los límites de la transición política: la vía civilista a un sistema de dominación de clase emergente.

Como se ha señalado en otro trabajo (Guerrero, 2022), a pesar de su intensidad, la coyuntura de movilización social del Paro Nacional (2019 a 2021) no instituyó un nuevo posicionamiento de fuerzas a nivel nacional. Este aspecto es decisivo, pues el gobierno del Pacto Histórico no es el resultado de una ruptura revolucionaria que permita evaluar su gestión como un período de transición hacia el socialismo –error de lectura política típicamente ultraizquierdista-. La legitimidad del nuevo gobierno no proviene, por tanto, del resultado de una prueba decisiva de fuerzas que permita superar el carácter capitalista del

poder político sino del cumplimiento de las reglas de juego del proceso electoral, aún inscrito en el sistema de dominación vigente.

En consecuencia, resulta cierto que el Pacto Histórico logró incorporar a su base de sustentación social a buena parte de las capas subalternas movilizadas durante el Paro Nacional, atrayéndolas a la lógica de la lucha política por vía electoral. No obstante, la dirección global del proceso ha recaído en fracciones progresistas de la mediana y pequeña burguesía, que han asumido una posición más favorable para imponerle reformas al gran capital y a la gran propiedad territorial, en la vía de desarrollar condiciones de acumulación orientadas al mercado interno, proceso que demanda adecuaciones democráticas a las modalidades de dominación burguesas.

Con el objetivo de atraer a otras fuerzas sociales y ampliar su ventaja electoral, el movimiento liderado por Gustavo Petro amplió el espectro de alianzas de clase en un momento de polarización que desgarró al “centro político”, espacio de acumulación política de la pequeña burguesía liberal-democrática. Ese hecho, sumado al balance contradictorio del Paro Nacional, configuró una situación efectiva de transformismo político que, incorporando a muchos de los liderazgos subalternos al aparato de Estado, le ha permitido a la pequeña-mediana burguesía asumir la conducción del proceso, llenando el vacío ideológico y de referente organizativo unitario de las luchas subalternas.

Existe un amplio debate sobre los alcances del transformismo político, categoría de análisis propuesta por Gramsci (1999). En el contexto teórico de este estudio, se incorporan tres dimensiones de análisis con esta categoría: en primera instancia, el transformismo es uno de los mecanismos que puede adoptar la lucha por la dirección de la construcción hegemónica ascendente. Su rasgo característico, en segunda instancia, es la capacidad de atracción ideológica, cultural y moral de una fracción de las clases dominantes sobre las clases subalternas que, en tercer lugar, terminan por apropiarse el proyecto político del grupo dirigente, en ausencia de un momento de síntesis política de su propia visión del proceso.

Desde esta perspectiva es posible analizar los alcances del programa de reformas económicas del gobierno del Pacto Histórico, cuyo carácter fue señalado por el propio presidente Petro: remover los elementos de la producción y de la organización política del país que obstaculizan el desarrollo del capitalismo en Colombia, porque corresponden a relaciones económicas atrasadas, pre-capitalistas o monopólicas.

Esta visión del proceso ha generalizado dentro del Pacto Histórico el planteamiento estratégico de lo que aquí se denomina como etapismo redistributivo, esto es, orientar la acción del aparato de Estado a reformas que aceleren la acumulación de fuerzas, para aislar y neutralizar a las fracciones más retardatarias del Uribato, tarea inmediata que ha justificado la alianza con elementos de la clase dominante.

De forma subsecuente, al consolidar el programa de reformas democrático-liberales desplegadas desde arriba, es posible conformar una base de apoyo movilizable pero subordinada a la lógica estratégica general: contener los antagonismos creados por la transición a un nuevo sistema de dominación dentro de los límites de la institucionalidad burguesa, creando las condiciones para desencadenar el desarrollo capitalista de las fuerzas productivas sin atravesar por un momento político de ruptura.

Con esto, el Pacto Histórico adopta una fórmula de aproximación indirecta que acelere el desgaste político del Uriato, para evitar que la salida a la crisis de dominación burguesa se desborde y se dirima a través del choque frontal de fuerzas, orientación cristalizada en la política de Paz Total. Para precisar el alcance de dicha transición, vale señalar que el desplazamiento del sistema dominante de alianzas al eje pequeña burguesía-clases subalternas, proceso aún incipiente y poco consolidado, puede configurar modalidades de dominación democrático-redistributivas, sin que ello signifique modificar el carácter capitalista del Estado colombiano.

Ciertamente, esta concepción del proceso es compatible con la tradición de Frente Amplio, racionalidad táctica profundamente enquistada en la cultura política de izquierdas en Colombia. Desde esa perspectiva, no es posible impulsar transformaciones sin establecer alianzas con fracciones progresistas de la burguesía –el Pacto Histórico- o asumir compromisos¹² con capas burocrático-partidistas tradicionales, que ayuden a profundizar las tensiones entre estas y las clases dirigentes que representan –el Gran Acuerdo Nacional-.

Por supuesto, el acceso por vía electoral a la gestión del aparato de Estado consolida la capacidad de las fracciones dirigentes dentro del Pacto Histórico de agrupar alrededor suyo a un conjunto más diverso de clases y grupos sociales. Para precisar los grados de influencia de cada sector en el gobierno entrante resulta útil diseccionar la composición del gabinete de gobierno, que debe cuidar un muy delicado equilibrio de fuerzas que neutralice los antagonismos y permita avanzar el proceso de transición, dentro de sus propios límites y de los mecanismos formales de legitimación política burguesa.

Los ejes estratégicos de la política de gobierno se despliegan a través de los ministerios de mayor jerarquía: interior, hacienda y defensa, ninguno de los cuales fue asignado a cuadros orgánicos provenientes de Colombia Humana, movimiento político del presidente.

a. La designación de Alfonso Prada, secretario general de Santos durante el último año de gobierno, sella el compromiso con los partidos políticos tradicionales y un sector de la maquinaria burocrática que disintió del Uriato desde el 2011; su propósito es contener, demorar y, dentro de los

¹² Al respecto, resulta muy útil la distinción entre alianzas y compromisos que, apoyado en el pensamiento de Lenin, propone Ruy Mauro Marini (1976) a propósito de su análisis de la política de alianzas de la Unidad Popular, en Chile. Las alianzas conforman el bloque político alrededor de los intereses que es posible asumir y promover; los compromisos, por su parte, son acuerdos transitorios con sectores que, por la relación efectiva de fuerzas, solo es posible neutralizar respetando sus intereses.

límites de los arreglos políticos clientelares, quebrar la confluencia opositora que pueda constituirse alrededor del Centro Democrático.

b. No obstante, es el ministerio de José Antonio Ocampo, cuadro tecnocrático proveniente de la CEPAL, la pieza fundamental del programa económico del Pacto Histórico, espacio del aparato de Estado que cristaliza el contenido de clase de su concepción reformista. Vale señalar que la conformación de una alianza de clases obrero-burguesa de línea populista, que nunca llegó a consolidarse en Colombia, no es un proceso político que se libre principalmente en el terreno de las ideas económicas; al contrario, es el estado actual de la lucha de clases y las contradicciones del desarrollo capitalista en Colombia, brevemente analizadas antes, lo que ha creado un ambiente ideológico propicio para reposicionar la agenda económica del social-desarrollismo cepalino¹³.

A través suyo, la mediana y pequeña burguesía propietaria apuesta por relanzar el proceso de acumulación sobre una base productiva de mayores dimensiones, lo cual requiere vencer las restricciones a la demanda de bienes de consumo en el mercado interno. Para esto, impulsa objetivos de política económica como la reactivación industrial, la redistribución del ingreso o la reducción de la desigualdad.

c. Para la gestión de las relaciones cívico-militares, fue designado el exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema Iván Velásquez, con una amplia trayectoria en la judicialización de casos de violación de derechos humanos y paramilitarismo. La designación de Velásquez es un indicio de la lectura política que hace el gobierno Petro sobre el estado de ánimo dentro del ejército y la policía, de cara al posicionamiento político de la izquierda.

La imagen de legalidad del nuevo ministro de defensa, que a pesar de simpatizar con la Colombia Humana no proviene orgánicamente de alguna de las fuerzas de coalición, le permite transmitir la idea de que la renovación de la cúpula militar o la reforma a la policía, incluyendo la discusión sobre la eliminación del ESMAD, son adecuaciones en el marco del orden constitucional y no el resultado de un juicio político de la izquierda. De esa manera, el gobierno entrante trata de evitar la polarización de la tropa alrededor de los sectores militaristas de línea dura, es decir, aquellos que desean precipitar la confrontación abierta de fuerzas para dirimir la crisis de dominación en un sentido restaurador, caso paradigmático del general Zapateiro y la Asociación de Oficiales Retirados, ACORE.

d. Alrededor del anillo ministerial de mayor jerarquía se conforma el resto del gabinete que, en términos generales, consolida el sistema de alianzas y compromiso políticos sobre el que se apoya el

¹³ Sin duda, uno de los aspectos más relevantes de la crisis de dominación burguesa es que remueve las viejas certezas ideológicas sobre la política de desarrollo en el país. Al respecto, es necesario tener en cuenta que el desarrollismo cepalino no constituye un bloque unificado de ideas económicas; a pesar de que todas sus corrientes coinciden en destacar la importancia económica del Estado, la variación neo-desarrollista enfoca los instrumentos de política económica en la industrialización con vocación exportadora privada; por su parte, el social-desarrollismo, prioriza la reactivación industrial sobre la base de un régimen de redistribución del ingreso. Ver (Zahluth, 2012)

gobierno del Pacto Histórico. Para desarrollar las reformas que corresponden al núcleo económico esencial de su proyecto político junto a Ocampo, ha designado a cuadros liberales como Cecilia López, –de extracción partidista samperista y orientación ideológica neodesarrollista- en el ministerio de agricultura, y a Catalina Velazco, en el ministerio de vivienda.

Por su parte, el propósito de apuntalar el Gran Acuerdo Nacional, a través del cual aglutina elementos burocrático-partidistas tradicionales, explica el nombramiento de Alejandro Gaviria - ministerio de educación-, Guillermo Reyes –conservador-, en el ministerio de transporte, y Mery Gutiérrez –del Partido de la U-, en el ministerio TIC, carteras con una importante destinación presupuestal.

Los cuadros “orgánicos” de la Colombia Humana y otros movimientos políticos de izquierda han sido ubicados en áreas donde pueden operar reformas sociales y ampliación de derechos, conformando la mayoría del gabinete con amplia participación de mujeres. No obstante, el ritmo y alcance de dichas reformas dependerá, en última instancia, de las decisiones de política económica y de los arreglos políticos con otras fracciones de clase, es decir, del equilibrio de fuerzas con los grupos de presión instalados en los ministerios de mayor jerarquía.

Al frente de las carteras directamente administradas por el Pacto Histórico, han sido ubicados liderazgos sociales de amplia trayectoria en la lucha sindical y popular, como Gloria Inés Ramírez – ministra de trabajo-, Patricia Ariza –ministra de cultura- y la vicepresidenta Francia Márquez; junto a ellas, se ha posicionado una generación emergente de liderazgos de orientación liberal-progresista, cuya influencia se ha ampliado con el nuevo gobierno: Susana Muhamad -ministra de ambiente-, Carolina Corcho –ministra de salud- e Irene Vélez –ministra de minas-.

En síntesis, por su articulación jerárquica dentro del aparato de Estado y la capacidad relativa de cada ministerio para determinar el ritmo y los alcances de la transición, la composición del gabinete de gobierno ayuda a verificar la inserción subordinada del campo popular al sistema de alianzas del Pacto Histórico.

4.2 Prioridades de la agenda legislativa: las contradicciones del etapismo redistributivo del Pacto Histórico.

Por el predominio que ejercen las pequeñas y medianas burguesías, la estrategia de transición implica un compromiso con el sistema político vigente y, además, debe ofrecer garantías a las capas burocrático-partidistas tradicionales, cuya subsistencia política depende del control de cotos de poder dentro del aparato de Estado; este hecho ha facilitado que notables adversarios ideológicos, como el Partido Conservador, se sumen a la bancada de gobierno.

De esa forma, elementos de la clase dominante han replegado su área de influencia política directa, a cambio de ganar un margen de negociación con el nuevo gobierno que les permita moderar el

alcance de las reformas del Pacto Histórico y contener su despliegue, a la espera de mejores condiciones políticas para reagruparse. Ceder espacio político para ganar tiempo de maniobra.

La consecuencia inmediata ha sido el desplazamiento de la lucha de clases del terreno de la protesta social a la esfera legislativa. Al asumir la vía electoral-reformista, el Pacto Histórico debe disputarle el poder político al Uriato en el terreno de los órganos parlamentarios del sistema de dominación en declive, para lo cual debe adoptar las reglas formales e informales del proceso político instituido, administrando la dinámica de movilización social dentro dichos límites.

Hasta ahora, se ha establecido una ruta de análisis sobre el carácter de clase del Pacto Histórico, su estrategia política de transición y la fisionomía del sistema de alianzas y compromisos políticos que conforma su base de apoyo. Sobre esta base, es posible ponderar la movilización de las mayorías legislativas del Gran Acuerdo Nacional alrededor de reformas que le permitan adecuar la legalidad vigente para impulsar cambios en política económica, tributaria y de seguridad.

Dichas reformas están enmarcadas en las dos grandes apuestas políticas del Pacto Histórico: la transformación de la matriz energética para des-carbonizar la economía y la política de paz total. A continuación se profundiza en las prioridades y alcances de la agenda legislativa y el sentido que adquieren dentro de las relaciones de fuerza vigentes.

Desde una perspectiva comparada, el peso de la agenda ambiental es uno de los rasgos característicos de la segunda generación de gobiernos progresistas en América Latina durante el siglo XXI. En su momento, las experiencias de gobierno que conformaron la Marea Rosa profundizaron el extractivismo minero-energético como medio de financiación de sus políticas redistributivas y de reactivación industrial.

En algunos de estos países –Ecuador y Brasil, particularmente- el flujo de divisas ayudó a ampliar la base productiva sin modificar las relaciones capitalistas de producción, evitando contrarrestar la capacidad de acumulación política de la gran burguesía. Dichos fracciones, agazapadas en el período de bonanza petrolera y otras materias primas, pasaron a la ofensiva cuando la crisis económica minó la base material del colaboracionismo de clase impulsado por los gobiernos progresistas, hacia 2014, año en el que inicio una oleada restauradora de victorias electorales y golpes de Estado.

En el caso de Venezuela, esta tendencia profundizó la estructura rentística de la economía, imposibilitada para superar su dependencia al precio del petróleo y, con esto, ha dejado en manos de Estados Unidos una poderosa herramienta de estrangulamiento económico del proceso bolivariano: el embargo energético (Curcio, 2018).

Es probable que, además de sus planteamientos sobre la colapso climático mundial – completamente acertados, por demás- el Pacto Histórico haya captado las deformaciones que la financiación vía extractivismo incorpora a la reactivación del proceso de acumulación. No obstante, el

problema del peso desmesurado del sector minero-energético está lejos de resolverse si solo se desplazara a la capa burocrática y fracciones de clase que, en posesión del aparato de Estado, captan la renta petrolera.

Por los aspectos que ya se han discutido, la centralidad de la explotación petrolera es una forma transitoria de la función económica que cumple el sector externo en economías dependientes, como la colombiana. En ausencia de sectores productores de maquinaria e insumos, cada ciclo de reproducción ampliada del capital industrial consolida la importancia relativa del sector generador de divisas, fundamental para obtener los medios de circulación necesarios para la transferencia tecnológica y la concentración técnica de capital. De esa forma, se crean incentivos para la integración monopólica al capital imperialista y la adopción, por parte de capitales de menor composición orgánica, de modalidades intensivas de explotación de la fuerza de trabajo (Marini, 1977, p. 68).

Por tanto, la diversificación exportadora y la des-carbonización relativa de las fuentes de energía no garantizan formas de desarrollo económico independientes y auto-centradas, siempre que subsistan las relaciones de producción actualmente vigentes. En este sentido, cualquier iniciativa de transición energética, propósito loable para garantizar la subsistencia de las clases trabajadoras, debe implicar una estrategia de transición política para la superación del capitalismo dependiente y, con ello, del capitalismo como forma de organización de la producción y la vida en sociedad a escala planetaria.

No obstante, el problema del rentismo petrolero se le presenta de forma parcial a las fracciones burguesas que conducen el programa de reformas económicas del Pacto Histórico. A su entender, además de los graves efectos sobre la estructura ecológica, el mecanismo mono-exportador de tres pilares: petróleo, carbón y cocaína, obstaculiza el desarrollo industrial por sus efectos sobre la balanza comercial y el tipo de cambio, que desestimulan la producción interna a favor de la importación de bienes de consumo, además de estar directamente implicados en la financiación del conflicto armado.

Por lo mismo, cabe la pregunta por el grado de acompasamiento entre la política de transición energética y la estrategia de reactivación industrial. La cuestión es de altísima relevancia, pues ayuda a desentrañar las contradicciones propias de un programa económico de carácter reformista para el desarrollo de las fuerzas productivas en el país.

En ausencia de otras fuentes generadoras de divisas, que permitan modernizar y ampliar el capital fijo, el relanzamiento del proceso de acumulación podría desarrollarse sobre una base técnica de baja composición orgánica y mayor demanda de mano de obra, como otrora formulara el Plan Currie en los 70 (Arrubla, 1964), a la que corresponden modalidades extensivas de explotación de la fuerza de trabajo, en la forma de plusvalía absoluta.

No obstante, el grado de composición técnica del capital no es algo que obedezca a la voluntad política del gobierno o la decisión individual de cada capitalista, sino a la fuerza objetiva de la

competencia, que empuja a los capitales de menor tamaño y composición orgánica a elevar la productividad con inversiones en capital fijo, expulsando masas ingentes de trabajadores fuera de la órbita de la producción. En el caso de Colombia, cabe señalar que cualquier programa de incentivos a las medianas y pequeñas unidades de producción se va a desarrollar en las condiciones dominantes de acumulación de capital en el país, altamente concentradas y desiguales.

No corresponde a la lógica del capital, entonces, elevar el nivel de acumulación en las medianas y pequeñas unidades de producción a través de los programas de financiación pública, solo para mantener una base técnica de baja productividad y alta demanda de trabajo, cuando existe un polo monopólico de alta productividad que capta plusganancias extraordinarias. Como se observa en uno y otro escenario, por su propio nivel de desarrollo, las relaciones capitalistas tienden a reproducir y agudizar la contradicción fundamental entre capital y trabajo, acotando paulatinamente la base material del colaboracionismo de clase entre la mediana-pequeña burguesía y las clases subalternas, que está en la base del planteamiento político del Pacto.

Ya en el terreno de la lucha de clases, sobre la base de sus contradicciones materiales, los programas de reactivación industrial dirigidos por la mediana-pequeña burguesía enfrentan una doble resistencia. Por un lado, deben orientar la acción del aparato de Estado colombiano a elevar el nivel medio de productividad para competir con el gran capital. Para esto deben asumir el control de los mecanismos de distribución de divisas y adoptar una política cambiaria que acelere la transferencia tecnológica; garantizar la intervención del Estado con crédito de fomento a bajas tasas de interés; ampliar el mercado interno sobre la base de un régimen de redistribución del ingreso; y reorganizar la propiedad de la tierra para elevar la productividad de la producción agrícola, facilitando la sustitución de importaciones de insumos básicos y la reducción del precio de los alimentos en las ciudades.

No obstante, todas estas palancas económicas se encuentran actualmente bajo el control del gran capital imperialista y burocracias rentistas locales; de los grupos financieros que concentran la oferta de crédito y la administración pensional; y de la gran propiedad territorial, que profundiza la parálisis productiva del sector agrícola; son, por tanto, el fundamento material del poder político de las fracciones de clase que conforman el bloque de poder aún vigente. Ciertamente, a pesar de haber tomado posesión del aparato de Estado, la correlación de fuerzas en la esfera de los medios de producción crea condiciones para que la mediana-pequeña burguesía incline la fórmula de crecimiento de la tasa de ganancia a formas más intensas de explotación laboral, con las manifestaciones de resistencia social que este proceso puede desencadenar.

Es en este cuadro político que adquiere sentido el orden de prioridad de las reformas legislativas del Pacto Histórico, coherentes con una concepción gradualista del proceso de transición, que inicia con la reforma tributaria mientras crea el clima de opinión necesario para impulsar la reforma pensional y rural, que conforman el núcleo económico fundamental en la disputa por el poder político. De esa forma,

posterga paulatinamente las reformas en el ámbito laboral, político, de salud y de policía, objetivos de agenda política subordinados a las prioridades del sector dirigente del Pacto Histórico, a la espera de la maduración efectiva de las relaciones de fuerza en los próximos meses y años.

El primer embate del Pacto Histórico ha sido la reforma tributaria, con la que espera recaudar 50 billones de pesos, diseñada para incorporar mecanismos de redistribución de plusvalía que permitan fondar los programas de financiación pública al desarrollo y de transferencia monetaria a los grupos de más bajo ingresos.

El contenido de dicha reforma parece estar asistido por dos lógicas: una de carácter estratégico, que asume que el aspecto fundamental de la parálisis productiva es el acelerado proceso de concentración de la riqueza, y no el modo material de producción en el que está contenida dicha forma de distribución, el capitalismo; y otro de carácter táctico, consciente de que el grado de consolidación política y capacidad de acumulación de fuerzas del Pacto Histórico depende del mejoramiento material de las condiciones de vida de la sociedad en el corto plazo, luego de que la pandemia y la inflación agudizaran la crisis.

Este último aspecto es determinante para contener la ofensiva económica que pueda desencadenar el bloque de poder cuando el Pacto Histórico impulse la reforma pensional, continuación lógica y estratégica de la reforma tributaria, para disputarle el control de la principal fuente de financiación interna del país: los ahorros pensionales.

No obstante, pasadas solo algunas semanas del inicio su gestión, el gobierno cedió en aspectos importantes del proyecto inicial de reforma tributaria. La propuesta original concentraba el recaudo en los dividendos e impuesto a la renta sobre personas naturales con salarios de más de 10 millones de pesos -US\$ 2500-, además del desmonte de exenciones y beneficios tributarios. A la fecha (octubre de 2022), el proyecto redujo la expectativa por recaudo directo, de 25 a 20 billones de pesos –los 25 restantes provendrían de control de evasión-, entre otras concesiones: mantener beneficios tributarios al sector de hidrocarburos, reducir los impuestos a bebidas azucaradas y autorizar días sin IVA; por tanto, aceptó mitigar los efectos de la tributaria sobre tres ejes de acumulación: el minero-energético –vehículo del gran capital extranjero-, el capital agroindustrial y el capital comercial.

A pesar de esto, grandes gremios económicos como la ANDI – grandes industriales- y FEDEGAN han arremetido la ofensiva contra el proyecto de reforma, llamando a los empresarios a detener sus inversiones. Además de configurar el asedio económico, han movilizad el cerco mediático contra el gobierno a través de grandes formadores de opinión, como los periódicos El Tiempo, La República y Semana, asistidos por la red de influenciadores articulados desde el gobierno Duque (Coronell, 2020). Al respecto, surge nuevamente la cuestión sobre el ritmo de la reforma económica y el margen de maniobra política para desarrollarla, que aún plantea dudas sobre el nivel de movilización de fuerzas que está dispuesto a desplegar el Pacto Histórico para vencer la resistencia del bloque dominante.

La cuestión que reviste mayor importancia actualmente es si la fórmula de apaciguamiento político vía concesiones puede permitirle al Pacto Histórico sostener la iniciativa estratégica sin apelar a la movilización de masas; esto en el contexto de la crisis económica actual, que restringe la base material de los acuerdos políticos fundados en un nuevo régimen de distribución de plusvalía.

Para analizar adecuadamente la situación, es útil volver sobre la concepción del Estado y el poder político en tanto que relaciones sociales, cuya condensación puede desplegarse, recogerse y reconcentrarse en distintitos ámbitos del aparato de Estado y el sistema de dominación, según las circunstancias que establezca la lucha de clases (Osorio, 2022, p. 46). Las primeras señales de resistencia de los gremios del gran capital muestran que la estrategia del bloque de poder en Colombia durante los próximos años será recogerse en sus núcleos económicos fundamentales, además de los aparatos propiamente coercitivos del Estado, que aún controla. De esta forma puede ponerse en posición de neutralizar, cuando sea posible, el ritmo de reformas económicas del Pacto o, dado el escenario, acelerar las contradicciones de dicho programa.

Para citar un ejemplo, cabe señalar que un programa de transferencias monetarias para los segmentos subalternos de más bajos ingresos que no resuelva, en la misma proporción, el problema del fomento a la producción puede profundizar la ola inflacionaria actual, facilitando el uso de dicho fenómeno como herramienta de desestabilización política, caso paradigmático de Venezuela.

En este contexto, la necesidad de contener el precio de los alimentos en el marco de una política de reactivación industrial refuerza los antagonismos alrededor del otro gran engranaje del programa de gobierno del Pacto Histórico: la reforma agraria para encarar la concentración de la propiedad de la tierra. Una cuestión que, enfocada desde la perspectiva liberal-burguesa, obstaculiza el desarrollo de las fuerzas productivas en la ciudad por los efectos de apropiación rentista de la tierra, impuesta por las clases terratenientes, sobre la productividad agrícola.

Ciertamente, el problema de la tierra es uno de los ejes rectores de la dinámica del conflicto armado y la lucha de clases en Colombia. En el pasado, durante la década de los 30 y 60, los esfuerzos parciales para establecer formas más productivas de tenencia de la tierra desencadenaron períodos de intensa confrontación social y armada en el país (Machado, 2002). El saldo de dichos períodos fue la radicalización insurgente del movimiento campesino y la imposición, en las áreas nodales de producción agrícola distintas al cultivo cafetero, de la hacienda y la producción agroindustrial sobre la base de la gran propiedad.

En el marco de este conflicto, las fracciones terratenientes escalaron la violencia armada para neutralizar los intentos de reforma agraria, incluso si estos correspondían a las necesidades del capital industrial, en busca de nuevos arreglos políticos que sellen sus intereses sobre la tierra; fue este el caso del golpe de Estado contra Alfonso López, en 1944, que prefiguró la violenta contrarreforma del período de La Violencia, y del Pacto de Chícoral, que derrotó definitivamente la reforma agraria de Lleras

Restrepo en 1972, sentando las bases del proyecto paramilitar contemporáneo, refrendado con el Pacto de Ralito, en 2001.

En este sentido, no es inédito que los intentos de reforma agraria desde arriba, operados por el Estado con una racionalidad económica burguesa, abran un marco de expectativas políticas que desencadenan la movilización de campesinos sin tierra y trabajadores rurales, quienes le imprimen al proceso métodos y objetivos de carácter popular. Con el ascenso del gobierno actual, a una coyuntura de confrontación protesta social predominantemente urbana, la del Paro Nacional, se ha sumado la intensificación del conflicto agrario, con tomas de tierras concentradas en regiones que fueron objeto de la campaña paramilitar de contrarreforma agraria hace dos décadas, en pleno período de ascenso y consolidación del Uriato.

Hasta el 23 de septiembre de 2022, ya se desarrollaban 108 ocupaciones de tierra en 22 de departamentos (Redacción Colombia, 2022), despliegue que le da un carácter nacional al proceso. La respuesta de los grandes propietarios territoriales, liderados por la Federación de Ganaderos, da cuenta de la brecha abierta entre el Estado y el aparato de Estado por el ascenso del Pacto Histórico. Sin los medios necesarios para movilizar de forma inmediata la maquinaria coercitiva del Estado, apela al otro componente armado de la estrategia contrainsurgente, denominados esta vez como Grupos de Reacción Solidaria; al tiempo que moviliza otros elementos del sistema amplio de dominación, particularmente los medios de comunicación.

Sin duda, el desbordamiento del movimiento de masas sobre uno de los centros de gravedad del bloque de poder supone un delicado dilema para el Pacto Histórico, entre profundizar el proceso de transición elevando el protagonismo político de las clases subalternas o asumir una tregua temporal con la gran propiedad territorial, postergando la disputa por uno de los pilares de su programa de reformas económicas. En las primeras etapas del proceso, ha predominado una estrategia de contención del conflicto, que combina la disuasión policial sin el uso efectivo de la fuerza con el llamado del gobierno a los ocupantes, en cabeza de la ministra de agricultura, a no restar espacio político a la reforma rural con acciones de hecho.

En ese sentido, la posición del gobierno del Pacto Histórico frente a la movilización es coherente -no necesariamente acertada-, con sus esfuerzos por ubicar el eje rotación de la lucha de clases dentro del terreno de la institucionalidad estatal. Por esa vía, trata de asumir la conducción de los ritmos de movilización de masas para encuadrarlos en la estrategia de etapismo redistributivo, cuyo carácter gradual y contenido de clase difícilmente expresa los intereses estratégicos del campesinado sin tierra o los trabajadores rurales; una actitud que entraña la profunda desconfianza de las pequeñas burguesías y dirigencias partidistas de izquierda frente a las expresiones de masas.

CONCLUSIONES

Para terminar, es necesaria una síntesis de los argumentos expuestos por el capítulo, que pueda contribuir al debate teórico y político actual en Colombia. Ciertamente, cabe ubicar las ideas aquí señaladas en un contexto histórico de profunda efervescencia de la lucha de clases en el país; las perspectivas de cambio de las clases subalternas se han desplegado en ricas expresiones de insubordinación social y, dentro de ellas, han cifrado sus expectativas en la alternativa político-electoral que representó el Pacto Histórico.

El criterio de evaluación de la producción teórica crítica, entonces, no es otro que ayudar a afianzar el protagonismo creciente de los propios subalternos, bajo el horizonte estratégico de la unidad e independencia de clase. En el marco de dicho esfuerzo, a pocas semanas de haber iniciado el gobierno de Gustavo Petro, este documento trató de hallar tendencias históricas y manifestaciones embrionarias, aún implícitas y poco exploradas, de los desencuentros entre la dirección programática del Pacto Histórico, de carácter mediano-pequeño burgués, y los métodos de lucha popular que confluyen en dicha coalición.

Para esto, el capítulo ha caracterizado la coyuntura actual como una fase de confrontación abierta por el poder político, entre el sistema de dominación burgués encarnado por el Uribe y una construcción hegemónica ascendente, articulada en el Pacto Histórico. Dicha coyuntura, corresponde a un período histórico enmarcado por la crisis económica mundial, que ha acelerado la debacle del bloque dominante y la disputa entre fracciones burguesas en Colombia. El aspecto determinante de esta crisis orgánica fue el ascenso de la movilización de masas entre 2019 y 2021 que, no obstante, no logró un salto cualitativo alrededor de un referente programático y organizativo que dotara a los grupos subalternos de un proyecto político propio.

El triunfo electoral del Pacto entraña, entonces, una condición contradictoria: por un lado, es el resultado inmediato del acelerado proceso de radicalización política de las clases subalternas y la pequeña burguesía urbana, que profundizó el agotamiento político del Uribe. No obstante, el Paro Nacional no despuntó en un momento de inflexión en el que predominara el elemento de ruptura para la configuración de una nueva situación estratégica de fuerzas; de allí que el Pacto Histórico se instituyera a través de mecanismos formales de legitimación política, con la consigna de abrir una vía de transición que no suponga la confrontación abierta entre fuerzas.

En este contexto, la cuestión central reviste implicaciones estratégicas y tácticas, abordadas por el texto. La primera dimensión hizo referencia al problema del poder político y el Estado que, bajo la coyuntura actual, señaló los alcances del proceso de transición liderado por el actual gobierno. En tanto construcción hegemónica ascendente, al interior del Pacto Histórico predomina una concepción reformista que no se propone eliminar el carácter capitalista del Estado colombiano; al contrario, supone

necesario desarrollar las relaciones capitalistas de producción para superar las condiciones de atraso económico del país.

En ese sentido, el proceso de cambio implica la transición de una modalidad de dominación autoritaria y fuertemente articulada al mercado mundial por su alianza con el gran capital monopólico, a otra de carácter liberal-redistributivo, que se propone relanzar el proceso de acumulación sobre la base de un mercado interno de mayores proporciones y la reactivación industrial. Por tanto, en perspectiva estratégica, la transición abre una salida a la crisis de la forma *actual* de dominación, incorporando demandas históricas de las clases subalternas en un sistema de alianzas que adopta y administra el elemento de insubordinación social, sin que ello implique una fórmula de superación de la propia dominación burguesa.

En este marco, se analizó la composición del gabinete ministerial y las reformas legislativas que ha impulsado el gobierno progresista en los primeros meses de gestión. Considerada su estructura, el gabinete es un indicador del sistema de alianzas que ha tratado de establecer el Pacto Histórico; por su parte, la fisionomía económica del proceso de transición da cuenta del liderazgo ideológico de fracciones de la burguesía que imprimen su lógica a los proyectos de reforma tributaria, pensional y rural, ejes estratégicos de su disputa con sectores del gran capital y terratenientes tradicionales.

Al desarrollarse en estos ámbitos, el desarrollo actual de la lucha de clases en el país ha facilitado el establecimiento de alianzas entre el campo popular y elementos reformistas de la pequeña-mediana burguesía. Esto alrededor de una agenda económica y social de reconocimiento de derechos, redistribución del ingreso, acceso a la tierra y contención del autoritarismo de Estado. Dicha asociación se ha revestido de elementos ideológicos que refuerzan el colaboracionismo de clase, a la vez que lo desdibujan en el ámbito de la consciencia; caso es este de expresiones como “nuevas ciudadanías” o la filiación del nuevo gobierno y varios de sus aliados políticos de izquierda a referentes teóricos como Thomas Piketty.

En síntesis, el programa económico del Pacto se limita al régimen de distribución de plusvalía entre fracciones de capital y el ensanchamiento del mercado interno, a través de incrementos salariales, transferencias monetarias y aumento de la oferta agrícola; se propone, por tanto, incorporar el consumo obrero en la conformación de un régimen de plusvalía relativa. No obstante, todo régimen de distribución de valor está contenido en las relaciones de producción que determinan la anatomía de una sociedad; sin el desarrollo de formas de gestión económica popular y control obrero de la producción, las relaciones capitalistas reproducen con mayor o menor nivel de antagonismo sus polos constitutivos: capital y trabajo.

Desde la perspectiva totalizante del materialismo dialéctico, los límites del programa económico reformista sientan las bases de nuevas expresiones políticas de la lucha de clases. Algunas de dichas contradicciones fueron consideradas en este capítulo, particularmente aquellas que hacen referencia a la

estrategia de reactivación industrial, transición energética y paz total. Desde el punto de vista que ha asumido este estudio, los aspectos determinantes para analizar los alcances de estos elementos de agenda fueron: su contenido de clase y el margen de maniobra política para implementarlas, considerada la crisis económica actual y la forma estructural de inserción dependiente del país al capitalismo mundial.

El proceso de transición liderado por el Pacto Histórico no constituye, entonces, un momento de ruptura revolucionaria y, mientras subsista la composición de clase de su dirigencia actual, no puede plantearse dicha tarea. Por tanto, respecto a la pregunta que se formuló al inicio del documento, se espera haber presentado suficiente evidencia sobre la incapacidad del Estado colombiano, en su configuración capitalista aún vigente, de vehicular estratégicamente los intereses de los trabajadores del país, incluso si algunos cotos del aparato de Estado han sido ocupados por la vía electoral.

Esta conclusión permite plantear el problema táctico, esto es, determinar hasta qué punto la crisis orgánica, en su fase de desarrollo actual, le permite a las clases subalternas y grupos subalternos desarrollar la lucha de clases en condiciones más favorables. Entre muchos otros enfoques posibles, la crisis del sistema de dominación vigente solo puede prefigurar el ascenso de un gobierno popular si se desata la capacidad organizativa y de movilización de los trabajadores del campo y la ciudad.

Por supuesto, cabe el establecimiento de alianzas siempre que se consoliden bajo la dirección ideológica, política y cultural de las clases subalternas. Dicho esfuerzo deberá desarrollarse en condiciones histórica concretas, determinadas en la situación actual por la intensificación mundial de la lucha de clases en un contexto de crisis económica, que deteriora las bases materiales de las asociaciones popular-burguesas.

No obstante la retórica democrática de algunas de sus facciones, el límite objetivo de toda forma de competencia interburguesa es la comunidad material de sus objetivos respecto a los trabajadores: extraer plusvalía. El grado y ritmo de la transición no corresponde, entonces, a una línea de acción voluntarista o de elementos propios de los rasgos de personalidad de un líder progresista, por carismático que sea; ante un eventual fracaso en el esfuerzo por abrir una salida liberal-redistributiva a la crisis de dominación, resultado de la agudización de la crisis capitalista, la ley de hierro de la acumulación cohesiona al conjunto de la burguesía alrededor del resorte material de su situación de clase: sostener la tasa de ganancia sobre la base de formas intensivas y extensivas de explotación de los trabajadores y trabajadoras.

Por supuesto, para poder plantearse la situación objetiva y subjetiva de la lucha de clases en el momento actual, es necesario someter a una profunda revisión crítica los presupuestos ideológicos del reformismo de izquierda, que también fueron explorados en este documento:

a. La concepción etapista del proceso de transición en sus dos modalidades. En su primera acepción, las reformas económicas implementadas desde el gobierno deben dinamizar el proceso de

acumulación para, en una segunda etapa, movilizar a las clases subalternas en maniobras aproximativas de aislamiento político en contra de las clases dominantes más retardatarias. Una táctica de esta naturaleza, que ha sido denominada aquí como etapismo redistributivo, convierte al conjunto de clases subalternas en agentes pasivos de concesiones instrumentadas desde arriba, tutelando sus expresiones de movilización a la lógica y necesidades de la confrontación interburguesa.

Esta forma de etapismo reconduce al terreno ideológico del adversario el ascenso de la movilización social y política de masas, que tendría que educar a las clases subalternas para las tareas de autogobierno popular y gestión económica plenamente socializada. Alrededor de referentes unitarios de dirección política, el proceso permite a las clases subalternas superar el localismo como ámbito inmediato de su perspectiva política, para plantearse los problemas nacionales y, más aún, alcanzar plena consciencia de que el modo de producción capitalista se desenvuelve a escala mundial.

La segunda forma de etapismo resulta más conocido. Es aquella que confiere al proceso de cambio un carácter antifeudal, esbozando consignas anti-imperialistas de contenido burgués y nacionalista. La perspectiva ideológica de esta forma de etapismo supone una desviación teórica de principio: asumir que en la formación económico-social colombiana no predominan las relaciones de producción capitalistas. Por tanto, es necesario atravesar un período de transición que siente las bases de dicho régimen de producción y prepare el terreno ideológico para reformas liberales.

Constituye, entonces, una modalidad etapista que desdibuja la contradicción fundamental entre capital y trabajo, desplazando el eje de acumulación a una de las manifestaciones secundarias de la lucha de clases: entre capital nacional y capital imperialista, crecientemente desvirtuada en formaciones económico-sociales dependientes, como la colombiana.

b. La concepción instrumental del Estado como terreno neutral ajeno a las determinaciones de clase de la sociedad. Esta noción, corresponde al período de repliegue ideológico que inició en los 90, generalizando el discurso teórico sobre la democracia liberal que ha vuelto a instituir una concepción del Estado como instancia neutral de arbitraje de los conflictos sociales.

Esta perspectiva ha sido discutida en este texto, enfocando el Estado capitalista como una relación condensada de relaciones de dominación y poder político de carácter burgués. Con esto, se ha criticado la propuesta de la vía democrática al socialismo, que ve en el Estado un terreno estratégico capaz de expresar, de forma duradera, los intereses de los grupos subalternos que asuman la conducción de su aparato represivo-burocrático. Para dicha concepción, es posible copar, desgarrar y consolidar puestos parciales de avanzada, conectando enclaves de resistencia popular dentro del Estado, hasta modificar el contenido de sus relaciones de dominación.

Se trata, entonces, de una forma actualizada del reformismo gradualista de comienzos del siglo XX, que tiende a agotar la cuestión organizativa y la actividad de masas a la mecánica puramente

electoral del proceso, bajo el ropaje de formas organizativas descentralizadas y reticulares. De esta forma, moviliza los acumulados políticos alrededor de la estrategia principal: afianzar posiciones dentro del aparato de Estado, manteniendo el eje de rotación de la lucha de clases en el terreno de la institucionalidad burguesa para evitar que la prueba decisiva de fuerzas asuma la vía de la confrontación abierta, adoptando la perspectiva de una guerra de desgaste y aproximación paulatina.

c. Concepciones que diluyen la distinción entre el poder y el poder político. Un aspecto propio de las formas autonomistas de gestión político-organizativa, que han contribuido al desarme ideológico de las clases subalternas, acelerando la dispersión organizativa a escala local y en múltiples agendas sin conexión evidente. Con esto, ensalza la política periférica con una concepción lineal del desarrollo de las fuerzas subalternas que, según esta concepción, vendrá solo del trabajo paciente con las bases sociales, sin rupturas, cambios de ritmo o transformaciones objetivas en las condiciones de acumulación política.

Esta concepción renuncia, explícitamente, a una estrategia de acumulación de fuerzas dirigida sobre el centro de gravedad del poder político burgués; en su lugar, adopta una táctica permanente de guerra de movimientos: copando esferas de reproducción ideológica de la sociedad burguesa, en una línea de acción prefigurativa que desdeña la mediación organizativa y la preparación política de dirigencias. A pesar de su retórica antisistémica, esta concepción reincorpora una visión gradualista del proceso, esperanzada en el cercamiento paulatino de las relaciones capitalistas; debido a esto, no asigna valor teórico o práctico alguno al elemento disruptivo, no por prefiguración moral sino por confrontación política, para la superación dialéctica del sujeto subalterno como agente de cambio.

En otro orden de ideas, cabe la crítica a los elementos ultraizquierdistas que no ven en el triunfo de Pacto Histórico ventaja táctica alguna para las clases subalternas. Al aportar elementos para esclarecer el carácter de clase predominante en el Pacto, este documento trató de precisar los alcances del programa de transición del actual gobierno. Por su insistencia en evaluar las acciones de Pacto Histórico en tanto vehículo histórico de transición al socialismo, el ultraizquierdismo recae en el aislamiento respecto al movimiento real y efectivo de fuerzas, desconociendo el significado político de la crisis de dominación sobre la estrategia de las clases subalternas.

La consecuencia inmediata es el inmovilismo que impide al elemento ultraizquierdista, disperso entre varias plataformas políticas y experiencias locales, afirmarse como un polo de reagrupamiento político que radicalice el programa del Pacto Histórico. De esa forma, la actitud típicamente sectaria del ultraizquierdismo ha profundizado el vacío ideológico y organizativo ocupado por otros sectores de la pequeña burguesía urbana.

En última instancia, si el fracaso del reformismo esbozado por el Pacto Histórico llegase a constituir una expresión más de la crisis de dominación burguesa, solo caben dos salidas en el próximo ciclo político: una salida restauradora, que irrumpa en medio de un estado de ánimo de radicalización

política, pesimismo social generalizado y deterioro de las condiciones materiales de existencia; condiciones que pueden formar un clima social propicio para que despunte la reacción fascista en el país, facilitando el avance de las nuevas derechas que hoy ocupan posiciones de América Latina y el mundo.

Este proyecto asoma ya sus fauces en el seno del Uribato y, de hecho, mostró la indecisión de la pequeña burguesía en las pasadas elecciones (2022), dubitativa frente al apoyo político a Rodolfo Hernández, manifestación local de esa derecha mundial emergente, o Gustavo Petro.

La otra vía es una salida superadora del orden actual, cuestión que exige plantear rigurosamente las tareas del período, considerados los límites del proceso de transición liderado por el Pacto Histórico. En las actuales circunstancias, dicha tarea pasa por el reagrupamiento político de las clases subalternas bajo un horizonte crecientemente autodeterminativo; activando formas más desarrolladas de poder propio que, por el nivel de intensificación de la lucha social, pueden perfilarse simultáneamente como órganos de disputa y embriones de poder popular capaces de enfrentar la respuesta del bloque de poder, tal y como se despliega actualmente, en cuatro frentes:

a. Contrarrestar el acoso de los conglomerados mediáticos, que conforman un verdadero destacamento de vanguardia de la oposición político-empresarial en Colombia y América Latina.

b. Romper el cerco legislativo a las reformas que el gobierno tramite en el Congreso. En dicho proceso serán determinantes las tensiones entre la capa burocrático-clientelista de las jefaturas partidistas, que han sido atraídas a la coalición de gobierno, y los grupos de presión empresariales articulados a los propios partidos tradicionales.

c. Derrotar el asedio económico que pueda presentarse bajo la forma de paros patronales, sabotaje a la infraestructura estratégica y ataques especulativos contra la moneda en un contexto de devaluación e inflación.

D. En última instancia, garantizar la subsistencia del proceso en contra del aniquilamiento físico de sus cuadros dirigentes y procesos de base.

Para terminar, vale considerar el fragmento de un texto de Stathis Kouvelakis, exdirigente de Syriza, en el que analiza las razones del fracaso de su movimiento en Grecia, en 2016, y las actuales perspectivas del programa de izquierda de Francia Insumisa, *L'Avenir en commun*:

Si Mélenchon no considera que realizar ese programa —solo ese programa, ni más ni menos— implicará importantes niveles de confrontación con las clases dominantes francesas y europeas, es imposible que lo tomemos en serio cuando afirma que lo implementará «pase lo que pase». Tomarse en serio esa confrontación quiere decir prepararla, ser consciente de que hará falta aplicar una serie de

medidas contra las que el enemigo reaccionará violentamente. El verdadero poder de Francia no es el del palacio del Elíseo ni el de Matignon, es el poder económico, el de los patrones, los grandes bancos, las finanzas y todo el poder alojado en la cumbre del aparato de Estado: los funcionarios de Bercy tienen mucho más poder que el ministro de Finanzas. (Kouvelakis, 2022)

BIBLIOGRAFÍA

- Arrubla, M. (1964). *Estudios sobre el subdesarrollo colombiano*. Bogotá: Editorial Oveja Negra.
- Bambirra, V. (1999). *El capitalismo dependiente latinoamericano*. Ciudad de México: Siglo XXI Editores
- Bensaid, D. (2013). *La política como arte estratégico*. Madrid: Viento Sur
- Cajamarca, I. (2021, 14 de septiembre). *Bancolombia y BlackRock lanzan nueve ETF en Mercado Global Colombiano de la BVC*. Diario La República. <https://www.larepublica.co/finanzas/bancolombia-y-blackrock-lanzan-nueve-etf-en-el-mercado-global-colombia-de-la-bvc-3232217>
- Céspedes, J. (2021). Línea de tiempo, Paro Nacional Cali. *Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz*. <http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2021/09/Linea-de-tiempo-final.pdf>
- Clavijo, S. (2013, 3 de junio). *La desindustrialización en Colombia*. Razón Pública. <https://razonpublica.com/la-desindustrializacion-en-colombia/>
- Coronell, D. (2020, 6 de febrero): *En las entrañas de una bodeguita uribista*. El Espectador. <https://www.elespectador.com/politica/en-las-entranas-de-una-bodeguita-uribista-article-903239/>
- Curcio, P. (2018). *Hiperinflación, arma imperial*. Caracas: Editorial Nosotros Mismos.
- Estrada, J. (2022): *El lugar sistémico de la elección presidencial en Colombia*. Revista Izquierda. Bogotá. <https://revistaizquierda.com/el-lugar-sistemico-de-la-eleccion-presidencial-en-colombia/>
- Franco, L. (2009). *Orden contrainsurgente y dominación*. Bogotá: Siglo del Hombre/Instituto Popular de Capacitación
- García, Á. (2008). *Empate catastrófico y punto de bifurcación*. *Crítica y Emancipación*, (1): 23-33. <https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20100830012019/2S1a.pdf>
- Gramsci, A. (1978). *Análisis de las situaciones. Relaciones de fuerzas*. En: *Notas sobre Maquiavelo, sobre política y sobre el Estado moderno*. Ciudad de México: Juan Pablos Editores.

- Giraldo, J., Luna, L., Muggenthaler, F. y Peters, S. (2022). *¿Del paramilitarismo al paramilitarismo? Radiografías de una paz violenta en Colombia*. Bogotá: Fundación Rosa Luxemburgo <https://www.kavilando.org/images/publicaciones/Del-paramilitarismo-al-paramilitarismo-libro-completo-1.pdf>
- Guerrero, A. (2022). *Análisis de coyuntura y subjetividades políticas emergentes: el caso del Paro Nacional (2019-202?)*. Bitácora Urbano Territorial, 32 (III): 79-XX. <https://doi.org/10.15446/bitacora.v32n3.102166>
- IFC, (2007, 19 de enero): *IFC proporciona US\$240 Millones a Davivienda para la adquisición de Granbanco, antes Bancafé*. <https://pressroom.ifc.org/all/pages/PressDetail.aspx?ID=21208>
- IFC, (2019, 22 de julio): *IFC otorga préstamo de US\$35 millones a Davivienda Costa Rica para apoyar proyectos verdes*. <https://pressroom.ifc.org/all/pages/PressDetail.aspx?ID=24803>
- IFC, (2020, 6 de mayo): *IFC otorga crédito de \$100 millones a Davivienda para impulsar a Pymes de mujeres*. <https://pressroom.ifc.org/all/pages/PressDetail.aspx?ID=18561>
- Jaulín, O. y Lizarazo, A. (2017). *Informe especial de estabilidad financiera: concentración y competencia en los mercados de depósitos y crédito*. Bogotá: Banco de la República.
- Kalmanovitz, S. (2021, 4 de julio). *Nuestro ahorro pensional*. El Espectador. <https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/salomon-kalmanovitz/nuestro-ahorro-pensional/>
- Kouvelakis, S. (2022). *Más allá de la melancolía de izquierda*. Revista Jacobin. Recuperado en: <https://jacobinlat.com/2022/05/23/mas-alla-de-la-melancolia-de-izquierda/>
- Lenin, V. (2010). *¿Qué hacer? Problemas candentes de nuestro movimiento*. Caracas: Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información
- (1973): *El Estado y la revolución*. Moscú: Ediciones Progreso.
- (1973b): *¿Se sostendrán los bolcheviques en el poder?* Moscú: Ediciones Progreso
- Machado, A. (2002): *De la estructura agraria al sistema agroindustrial*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Marini, R. (1976). *La pequeña burguesía y el problema del poder*. En: *El reformismo y la contrarrevolución. Estudios sobre Chile*. Ciudad de México: Ediciones Era, Serie Popular. <https://marini-escritos.unam.mx/?p=3165>
- (1974). *Subdesarrollo y revolución*. Ciudad de México: Siglo XXI Editores. <https://marini-escritos.unam.mx/?p=210>

- (1977). *Dialéctica de la dependencia*. Ciudad de México: Ediciones Era.
- Marx, K. (2015). *Crítica al Programa de Gotha*. En: *Antología*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- (2011): *La guerra civil en Francia*. Bogotá: Ediciones Desde Abajo
- Marx, K., & Engels, F. (2015). *La ideología alemana*. Ediciones Akal.
- Osorio, J. (2019). *Lucha de clases, el Estado capitalista y el poder político*. En: *Coyuntura: cuestiones teóricas y políticas*. Ciudad de México: Universidad Autónoma Metropolitana y Editorial Ítaca.
- (2022). *La cuestión de la vía democrática al socialismo*. En: *Argumentos* 98(35). pp. 35 – 65.
<https://argumentos.xoc.uam.mx/index.php/argumentos/article/view/1333/1264>
- Poulantzas, N. (2012). *Poder político y clases sociales en el Estado capitalista*. Ciudad de México: Siglo XXI Editores.
- Redacción Colombia (2022, 23 de septiembre). *¿Dónde están las invasiones de tierra en Colombia?* El Espectador. <https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/donde-estan-las-invasiones-de-tierras-en-colombia/#:~:text=En%2026%20departamentos%20del%20pa%C3%ADs,Internacional%20para%20la%20Preveni%C3%B3n%20y>
- Rocha, R. (2001): *El narcotráfico y la economía de Colombia: una mirada a las políticas*. Planeación y Desarrollo 3 (32).
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/RevistaPD/2001/pd_vXXXII_n3_2001_art.3.pdf
- Santa María, M. (2020, 25 de junio): *¿Qué pasó con la industria en la crisis de 1999?: Indicios sobre la coyuntura actual*. Diario La República <https://www.larepublica.co/analisis/mauricio-santa-maria-anif-2941063/que-paso-con-la-industria-en-la-crisis-de-1999-indicios-sobre-la-coyuntura-actual-3022479>
- Silva-Colmenares, J. (1977). *Los verdaderos dueños del país: oligarquía y monopolios en Colombia*. Fondo Editorial Suramérica.
- Silva-Colmenares, J., & Pardo, C. P. (2013). *Transnacionalización del grupo financiero Suramericana*. Economía y Desarrollo, 12(1).
http://uac2.fuac.edu.co/recursos_web/observatorio/publicaciones/2014/Transnacionalizacion.pdf
- Tauss, A., Pardo, D. y Graaf, D. (2019). *El bloque de poder contrainsurgente en Colombia y su papel en el resurgimiento de la derecha en América Latina*. Colombia Internacional 99. Bogotá
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-56122019000300063

Tobón, G. (2020). *Estado, política y economía en Colombia: capitalismo burocrático y gansteril*. Bogotá: Señal Editora

Vargas, D (2022, 21 de julio). *Petróleo y minería impulsan crecimiento de 77,6% en la inversión extranjera en Colombia*. El Colombiano. <https://www.elcolombiano.com/negocios/inversion-extranjera-directa-en-colombia-en-2022-crece-en-el-primer-semester-por-petroleo-ML18131058>

Zabaleta, R. (2011). *El poder dual en América Latina*. La Paz: Plural Editores